

Saliendo de la selva. El proceso de paz en Colombia

Autores: Dag Nylander y Tove Gravdal

Índice

Prefacio	7
Hacia la selva (<i>traducción preliminar</i>)	9
De Fosen a Bogotá	15
El drama de los rehenes y la luz verde de Støre	33
Del halcón a la paloma	51
La complicada logística	71
Un asesinato, pero negociaciones	85
A Hurdal en aviones fletados	109
La vida cotidiana en La Habana	131
Elecciones, lucha de las mujeres y un general descarriado	155
Crímenes y castigos (<i>traducción preliminar</i>)	179
Estados Unidos, Cuba y la paz de Colombia	207
Prisa y arrogancia	223
La dolorosa ronda extra	245
Implementación	261
Epílogo	275
Fechas clave del proceso de paz en Colombia	277
Lista de actores clave	283
Notas	293
Bibliografía	317

Hacia la selva (Capítulo 1)

Un helicóptero marcado con cruces rojas sobre fondo blanco despegó del aeropuerto de la pequeña ciudad de San José del Guaviare la madrugada del miércoles 15 de febrero de 2012. El ruido era infernal y un intenso olor a combustible y asfalto caliente se clavaba en las fosas nasales. El helicóptero voló bajo sobre los tejados antes de posarse sobre el río Guaviare, que serpentea por el interior de Colombia. Los pilotos se dirigieron a una zona al noroeste de la ciudad, sin saber exactamente adónde se dirigían. Una vez en el aire, recibieron un sobre cerrado. Dentro había una nota manuscrita con las coordenadas del lugar de aterrizaje.

Las coordenadas procedían de las Farc, el grupo guerrillero responsable de la guerra civil más larga de América Latina. Cuando la información se introdujo en los instrumentos del aparato, el gran helicóptero de transporte hizo un giro brusco en U antes de amerizar sobre un paisaje plano de bosques, campos y pastos. Mi nivel de adrenalina estaba por las nubes: me encontraba a punto de entrar en territorio de las FARC. Abajo, en la selva, dos comandantes guerrilleros esperaban a ser recogidos para reunirse con su enemigo en la mesa de negociaciones.

La expedición a la zona de guerra de Colombia era arriesgada y de máximo secreto. Las fuerzas militares colombianas podían derribar fácilmente un helicóptero en misión desconocida. Las Farc podrían estar más interesadas en adquirir nuevos rehenes en lugar de negociar la paz. Además, tanto los grupos armados, como las bandas criminales de narcotraficantes, tenían la voluntad y la capacidad de desbaratar una operación encubierta.

Bajo el traqueteo de las aspas del rotor, estaba yo sentado buscando humo entre los árboles del suelo. Las Farc iban a encender un fuego para marcar el punto de extracción, en caso de que las coordenadas no fueran suficientes, según los acuerdos secretos con la guerrilla. Después de volar unos diez minutos, vimos una columna de humo y luego un sitio de aterrizaje frente a una pequeña finca.

Abajo, entre los árboles, Sandra Ramírez y Mauricio Jaramillo oyeron el helicóptero dando vueltas sobre ellos. Ramírez estaba aterrorizada. Se había unido a la guerrilla a los 17 años y a duras penas había estado en una gran ciudad. Después de 30 años en la selva, iba a viajar a otro país por primera vez. Había sido compañera del fundador de las Farc, Manuel Marulanda, y había renunciado a su único hijo para dedicarse a la lucha armada. Ahora era la encargada de las comunicaciones por radio de la guerrilla.

Jaramillo, conocido como El Médico, había estudiado medicina antes de unirse a la guerrilla, y era quien había construido el servicio de salud de las Farc. También era el comandante del frente más duro de la guerrilla. Llevaba 34 años viviendo en la selva y sólo una vez se había visto con su familia. No había conocido a su hijo, que había sido concebido en su anterior vida civil.

Los árboles se doblaron y el polvo y los arbustos se arremolinaron cuando el helicóptero aterrizó. Al descender, vi a los soldados de las Farc montando guardia en el lindero del bosque que rodeaba el claro. Estaban fuertemente armados y vestían uniformes de camuflaje nuevos y limpios. Varios guerrilleros eran mujeres. Todos llevaban botas pantaneras de color café oscuro y suelas beige. El helicóptero aterrizó, la puerta se abrió y los cinco pasajeros que iban a bordo saltaron a tierra. No había rastro de Ramírez ni del Médico. Los pilotos apagaron el motor y aquel claro de bosque quedó en un silencio estrepitoso. Yo estaba con las manos vacías, rodeado de guerrilleros que nos observaban.

Caminé vacilante hacia un pequeño corral junto a una casa modesta. Una de las guerrilleras había buscado protección del sol abrasador a la sombra de un gran árbol. Era guapa, con un maquillaje impecable y unos aretes que tambaleaban sobre el cañón de su fusil. Cautelosamente entablé conversación con ella y le pregunté qué la había llevado a unirse a las Farc. Bueno, me explicó, la tierra en el país estaba injustamente repartida y muchos colombianos estaban excluidos de la política. Por eso se había unido a las Farc a los 17 años y llevaba 10 de ellos portando arma.

Una hora más tarde, Ramírez y El Médico llegaron con sus maletas en la mano por un estrecho sendero que atravesaba el bosque bajo de matorrales. El polvo del camino se posó en sus botas de caucho. El Médico caminaba inclinado hacia adelante, vestía camiseta blanca sobre los pantalones que apretaban algo su panza. Ninguno de los dos parecía un temible líder guerrillero.

Nos habíamos preparado por meses para su extracción. La cúpula de las Farc y un pequeño círculo de personas en torno al presidente Juan Manuel Santos habían planeado todos los detalles, en colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja y diplomáticos de Noruega y Cuba. Aun así, El Médico habló una última vez con su comandante supremo, Rodrigo Londoño, más conocido por su nombre de guerra "Timochenko", para asegurarse de que debían subir al helicóptero. "Todo está bien, se van", respondió Timochenko desde su escondite en la frontera con Venezuela, en otra parte del país. Ya no había vuelta atrás.

El escepticismo calaba hondo entre los emisarios de las Farc. Pocos días antes, aviones militares habían bombardeado objetivos a sólo un kilómetro de distancia de donde la operadora de radio Ramírez había estado trabajando en una choza improvisada. Sólo tres meses antes, el predecesor de Timochenko, el líder de las Farc Alfonso Cano, había sido asesinado por orden del presidente Santos. Ramírez temía que ella y El Médico cayeran en una trampa: que si subían al helicóptero les esperaba la cárcel o la muerte, en lugar de negociaciones.

Una inusual alianza noruego-cubana fue su seguro contra el engaño. Noruega y Cuba eran países garantes de las conversaciones secretas de paz, y ese día de febrero eso significaba acompañar a los emisarios de las Farc desde el territorio de la guerrilla hasta la mesa de negociaciones en La Habana, capital de Cuba. Allí me encontraba yo, un abogado y diplomático noruego de 43 años, de pie con dos comunistas cubanos frente a una choza en medio de Colombia, donde aseguramos a Ramírez y al Médico que era seguro viajar.

Los enviados farianos se cambiaron las botas pantaneras por zapatos antes de subirse al helicóptero con sus maletas. El Médico sólo llevaba una muda de ropa y un libro sobre la historia de las Farc. "Ahora me meto en la boca del lobo", dijo. Ramírez trajo una muda de ropa y radios, un ordenador, un módem, cables y una antena de seis patas. Estaba llena de miedo por lo que le pudiera pasar a ella y a los amigos que dejaba atrás. Tanto Ramírez como las guerrilleras en tierra lloraban.

Mi colega, Elisabeth Slåttum, nos esperaba en el aeropuerto de San José del Guaviare. De vuelta en Oslo, sólo el ministro de Relaciones Exteriores, Jonas Gahr Støre, y algunas otras personas del Ministerio sabían dónde estábamos. Ni la familia cercana, ni otros colegas, tenían idea de que Elisabeth y yo nos habíamos reunido con enviados de las Farc y del Gobierno colombiano tres veces desde el verano de 2011. Todos los implicados se cuidaron de guardar silencio: éramos plenamente conscientes de que, si la noticia de las conversaciones secretas se filtraba en Oslo, significaría el fin de la diplomacia noruega de paz en Colombia.

Violencia sin fin

La guerra civil en Colombia llevaba ya casi cinco décadas cuando sacamos a El Médico y a Ramírez de la selva para llevarlos a las conversaciones de paz en La Habana. Cientos de miles de personas habían muerto en la guerra, y una quinta parte de los 49 millones de habitantes del país estaban directamente afectados por la violencia. La gran mayoría de las víctimas eran civiles, que se vieron obligados a huir de sus tierras, que sufrieron abusos o presenciaron el asesinato o el secuestro de familiares, vecinos y amigos.

Colombia es un país hermoso y rico en recursos situado en el extremo norte de Sudamérica, con costas tanto en el océano Pacífico como en el mar Caribe. El país es exportador de petróleo, carbón, café y flores, pero también es el mayor productor mundial de cocaína. Los cárteles de la droga, los grupos guerrilleros y las fuerzas de seguridad del Estado desempeñan su papel en la larga historia de violencia internacional de Colombia. El país también se caracteriza por una enorme desigualdad. Un tercio de la población colombiana vive por debajo del umbral de la pobreza, y muchos de ellos pertenecen a grupos indígenas o a la minoría afrocolombiana.

El objetivo de las conversaciones de paz entre las Farc y el gobierno colombiano era poner fin a la violencia y abordar las desigualdades en Colombia. Había infinidad de obstáculos en el proceso hacia un acuerdo de paz, y las partes otorgaron a Cuba y Noruega el importante papel de evitar descarrilamientos y rupturas. Estuve a cargo del equipo noruego que siguió las negociaciones desde la fase secreta inicial en 2011 hasta la firma del acuerdo de paz casi seis años después. La tarea era polifacética e implicaba observar, dar consejo y consuelo cuando era necesario, y encontrar salidas cuando las partes llegaban a callejones sin salida. También mantuvimos informadas a las grandes potencias y a la ONU del drama en la mesa de negociaciones, y sacamos de la selva a un gran número de líderes de las Farc y de rehenes. Tuvimos que improvisar y tomar decisiones rápidas en crisis agudas, al tiempo que pensábamos a largo plazo y preparábamos el terreno para resolver conflictos que sabíamos que se avecinaban.

Muchos de los actores implicados en el proceso de paz tenían las manos manchadas de sangre. En la mesa de negociaciones había grandes egos y fundamentalistas ideológicos, intrigantes y llamativos retóricos intelectuales, cuya voluntad y capacidad de compromiso estaban desigualmente repartidas. Funcionarios de la ONU, expertos en justicia penal internacional, activistas de los derechos de la mujer, defensores de los derechos humanos y víctimas de la violencia volaron a La Habana para participar en este drama colombiano. Había que tratar con todos, tanto con los que hablaban con confianza como con las almas temblorosas, y esta tarea a menudo recaía en nosotros, que representábamos a los países garantes, Noruega y Cuba. Teníamos que tener cuidado de no poner en evidencia a Noruega ni a nosotros mismos, y aunque éramos pocos, hacíamos de todo, desde asesorar a criminales de guerra en los laberintos de la justicia internacional hasta dar informes en la Casa Blanca.

Trabajé en el proceso de paz de Colombia durante diez años. Como enviado especial noruego y facilitador de las negociaciones de paz, a menudo me metía en zapatos que me parecían demasiado grandes, y constantemente dudaba de si era capaz de desempeñar este papel. Pero cuando miré a mi alrededor, no vi a nadie en mejores condiciones para asumirlo. Además, las partes habían pedido a Noruega que fuera uno de los principales países de apoyo al proceso de paz, y yo era quien representaba al Ministerio de Relaciones Exteriores noruego. Muchas coincidencias me llevaron hasta allí, la primera de las cuales ocurrió en Brekstad, en Trøndelag.

Crímenes y castigos (Capítulo 10)

Leyner Palacios presintió problemas cuando una fuerza paramilitar se acercó a su aldea en el municipio de Bojayá en abril de 2002. Los guerrilleros estaban cerca y temía que estallaran enfrentamientos entre los grupos armados y que se perdieran vidas de civiles. Palacios, que trabajaba para la iglesia local, remontó el río Atrato hasta la capital provincial de Quibdó y pidió ayuda al obispo y a las autoridades. Fue en vano. Los paramilitares acamparon en el pueblo de Bellavista, donde Palacios vivía con su mujer y su hija de 12 años. Palacios se reunió con el comandante paramilitar frente a la iglesia del pueblo y le instó a retirar a sus hombres para evitar que la población civil cayera en la línea de fuego. Mientras hablaban, empezaron los combates en el pueblo vecino. El comandante desapareció, y poco después murió bajo la lluvia de balas de las Farc. En la madrugada del 1 de mayo comenzaron los combates en Bellavista.

Las balas llovieron sobre las casas del pueblo durante todo el día. Palacios y su familia intentaron refugiarse detrás de unos colchones. A medida que se acercaban los combates, huyeron de la casa, se metieron al río y volvieron a tierra, hacia la iglesia. Mucha gente ya se había refugiado allí, así que Palacios llevó a su familia a un convento cerca. Allí se sentían más seguros, ya que las paredes eran de cemento y no de tablas como en casa. La plaza frente a la iglesia estaba llena de paramilitares, y Palacios fue allí con un pequeño grupo de líderes locales para rogarles que se retiraran. Los hombres armados respondieron disparándoles. Palacios volvió corriendo al monasterio y empezó a escribir lo que había presenciado. Si los mataban a todos, al menos quedaría constancia de lo ocurrido.

En la mañana del 2 de mayo, oyeron una fuerte explosión. Palacios salió y vio una nube de humo que salía de la iglesia, cuyo tejado había sido arrancado. Alrededor del edificio yacían cabezas arrancadas y cuerpos mutilados, mientras los heridos se arrastraban por el suelo en un intento de salvar la vida. Los combates continuaban y Palacios se dio cuenta de que tenían que escapar. Él y su familia pasaron corriendo junto a los paramilitares y entraron en una casa donde había caído una granada. Se les unieron más personas, ondearon banderas blancas, pero tanto la guerrilla como los paramilitares siguieron disparándoles en su camino hacia el río. Una madre llevaba en brazos a su hijo asesinado; tuvieron que convencerla para que lo soltara. Palacios volvió corriendo a la iglesia, intentó rescatar a los heridos, tuvo que desistir y se retiró de nuevo al río. En una canoa lograron llegar a la vereda del otro lado. Allí, las Farc tenían el control. Palacios quiso volver para ayudar a los supervivientes, pero el comandante guerrillero se negó. La iglesia había sido atacada a las 10.45 de la mañana, y durante horas los heridos permanecieron indefensos bajo un sol abrasador que fue sustituido por una lluvia torrencial. Hasta el día siguiente no se calmaron los combates y Palacios no pudo regresar a Bellavista. Había cadáveres y restos de cadáveres esparcidos. Los rastros de sangre demostraban que muchos se habían refugiado en el monasterio y en la enfermería del pueblo. Podrían haberse salvado si hubieran recibido ayuda. Palacios y otros supervivientes recogieron los restos y los depositaron en una fosa común.

79 personas fueron asesinadas en Bellavista, u 86, si se cuenta como suelen hacerlo los afrocolombianos en la provincia del Chocó, incluyendo a los fetos en el vientre materno. Palacios los conocía a todos, 28 eran miembros de su propia familia. Fueron víctimas de una granada casera disparada por las Farc contra los paramilitares, pero que en su lugar impactó en la iglesia, alcanzando a quienes se habían refugiado allí. La masacre de Bojayá fue el incidente más mortífero de la guerra civil colombiana, en el que todas las víctimas fueron civiles. Muchas de ellas eran niños.

Doce años después, los líderes de las Farc escuchaban en silencio y con atención cómo Leyner Palacios relataba los dramáticos acontecimientos en la mesa de negociaciones en La Habana. En una gran sala de conferencias, algunas víctimas estaban sentadas una al lado de la otra, con los delegados de las Farc a la derecha y la delegación del gobierno a la izquierda. Frente a las víctimas, me senté con el cubano Rodolfo Benítez y representantes de las Naciones Unidas, la Iglesia Católica y la Universidad Nacional de Bogotá. Las tres instituciones habían seleccionado a 60 representantes de las víctimas. En otoño de 2014, viajaron a La Habana en cinco grupos de 12 personas para contar cómo el conflicto armado les había afectado a ellos, a sus familias y a sus comunidades.

Por primera vez en cualquier proceso de paz, las víctimas de la guerra pudieron reunirse con las partes cara a cara en la mesa de negociaciones. Ya en la fase secreta de 2012, las partes se dieron cuenta de que, de alguna manera, las víctimas tenían que tener un impacto directo en las negociaciones. La idea de invitar a representantes de las víctimas a La Habana fue evolucionando hasta concretarse en 2014. El proceso de selección fue extremadamente difícil y las disyuntivas fueron muchas. ¿Quién podía considerarse víctima del conflicto? Los asesinatos y secuestros de las Farc eran bien conocidos, pero ¿qué pasaba con los numerosos abusos cometidos por los militares con el pretexto de luchar contra una organización terrorista? ¿Deberían incluirse también las víctimas de los desplazamientos, robos y ejecuciones causados por parte de los paramilitares? Es bien sabido por los conflictos de todo el mundo que la historia la escriben quienes monopolizan el papel de víctimas. Una solución justa del conflicto armado colombiano no podría darse sin incluir los crímenes cometidos por todas las partes. Pero era una tarea casi imposible dar a más de nueve millones de víctimas un rostro representativo en la mesa de negociaciones de La Habana. Cuando me preguntaron si Noruega podía asumir la responsabilidad de seleccionar a las víctimas, dije inmediatamente que no. En su lugar, aconsejé a las partes que pidieran a actores externos que llevaran a cabo el exigente proceso de selección. El Gobierno y las Farc no debían elegir ellos mismos a las víctimas, y acordaron que no debían influir en quiénes eran seleccionados.

Cuando Iván Márquez se enteró de cómo se estaba desarrollando la selección de víctimas en Bogotá, acudió a mí y me expresó sus preocupaciones. Las partes tenían fuertes opiniones sobre quién debía representar a las víctimas, e hicieron lo que pudieron para asegurarse de que la selección apoyara su versión de la historia. Las Farc querían más víctimas de abusos estatales y paramilitares, mientras que el gobierno quería más víctimas de crímenes de la guerrilla. Ambos presionaron a la ONU, la iglesia y la universidad. Idun en Bogotá y yo en La Habana hicimos todo lo posible por ayudar a la ONU, que dirigió la delicada labor de hacer que las delegaciones de víctimas fueran representativas y aceptables para ambas partes. Fue difícil para el jefe de la ONU, Fabrizio Hochschild, complacer tanto a la parte gubernamental como a las Farc, sin importar las decisiones que tomara. Si Noruega hubiera asumido la tarea, habríamos perdido la confianza de ambos bandos. Las Farc se quejaron en voz alta de Hochschild, y en la delegación del gobierno, el general Mora fue por lo menos igual de crítico. En una reunión con Hochschild, se refirió sarcásticamente al chileno como el virrey de la ONU en Colombia y expresó su profundo desacuerdo con el método que había utilizado para seleccionar a las víctimas.

A lo largo del verano de 2014, continuó el minucioso trabajo de elaborar listas de víctimas justas y representativas. Una semana antes de que el primer grupo llegara a La Habana, aún no se sabía si realmente viajarían. El protocolo para el viaje aún no estaba listo, y las Farc denunciaron que la parte gubernamental en los medios de comunicación daba la impresión de que la delegación estaría compuesta solo por víctimas de abusos de la guerrilla.

Finalmente se superaron los últimos obstáculos y el 15 de agosto de 2014 partieron hacia La Habana las primeras doce víctimas. Leyner Palacios formaba parte de este grupo, que recibió mucha atención

en los medios colombianos e internacionales. Bojayá seguía siendo una zona conflictiva, con guerrillas y grupos armados criminales que se disputaban el control de las rutas de contrabando y realizaban diversas operaciones turbias en las selvas del Chocó. Palacios ya era un líder local muy conocido, y viajar a La Habana le hizo visible también en los medios de comunicación nacionales. Esto le convertía en un objetivo aún mayor de lo que ya era para los asesinos. La masacre de 2002 le había enseñado que no podía contar con la protección del Estado. Si los militares se hubieran tomado en serio sus advertencias y hubieran desplegado soldados, el atentado de Bellavista podría haberse evitado. También había observado, cuando las fuerzas gubernamentales llegaron finalmente a Bojayá cuatro días después de la masacre, que los militares y los paramilitares estaban cooperando. Efectivamente, fue la granada de las Farc la que mató al mayor número de personas en Bojayá, pero Palacios creía que el ejército y los paramilitares tenían parte de culpa en el crimen del que habían sido víctimas.

Palacios esperó mucho tiempo para decirles a su mujer y a su hija que se iba a La Habana y las llamó justo antes de subir al avión. Lloraron y le suplicaron que no fuera. Palacios también estaba preocupado, pero le tranquilizó el recibimiento en el aeropuerto, donde representantes cubanos y noruegos dieron la bienvenida a las víctimas y las condujeron ante los delegados de las Farc y del Gobierno. Le sorprendió que lo saludaran con respeto. Nunca antes había sido tratado con respeto ni por las Farc ni por los representantes del Gobierno. Sin embargo, se preocupó cuando Pablo Catatumbo, de las Farc, dijo que quería hablar con él en privado. ¿Qué querían las Farc con él? Palacios dijo que no.

Luz Marina Bernal también formó parte del primer grupo de víctimas. Habían pasado seis años desde que su hijo con retraso mental fue asesinado por los militares, como uno de los muchos falsos positivos, aquellos que eran recogidos en las calles, secuestrados y asesinados y luego disfrazados de guerrilleros para adornar las estadísticas del ejército. Había pasado un año desde que seis personas habían sido condenadas por el asesinato. Bernal sintió sobre sus hombros el peso de todas las víctimas de la violencia en Colombia cuando llegó a La Habana. Pensar en aquellos que nunca habían sido escuchados, que habían sido torturados y asesinados, le dio el valor para contar su historia frente al gobierno y las Farc. Bernal sabía que formaba parte de algo histórico.

Aquel día de agosto de 2014, las partes en La Habana escucharon las desgarradoras historias de Palacios, Bernal y las otras diez víctimas. Una de ellas era la viuda de un parlamentario del Cauca que fue secuestrado por las Farc y ejecutado tras cinco años de cautiverio. Una era el padre de un joven estudiante sospechoso de pertenecer a una milicia de las Farc y asesinado por la policía. Una vio cómo su hermano, parlamentario, era secuestrado y asesinado por las Farc antes de que su madre y otro hermano fueran detenidos por la guerrilla y ejecutados tres años después. Una pertenecía al grupo indígena wayúu y apenas había sobrevivido a una masacre en la que los paramilitares mataron a cinco mujeres de su familia. Uno era el padre de uno de los 32 jóvenes que desaparecieron y luego fueron encontrados muertos por un grupo paramilitar. Otra era la hermana de una mujer que fue obligada a subir a un coche y desapareció sin dejar rastro durante tres años, hasta que un agente reveló dónde estaba enterrado su cadáver. Un ex concejal municipal testificó cómo se había visto obligado a trasladarse debido a las amenazas de las Farc. Uno era hijo de un destacado político del Partido Comunista que fue ejecutado en 1989. Una había sido víctima de violencia sexual, desplazamiento forzado y persecución por parte de grupos armados por luchar por los derechos de las mujeres. Una era la madre de un policía que fue asesinado en un puesto por las Farc antes de que ella misma fuera desplazada de su hogar.

Los relatos de las víctimas conmovieron profundamente a todos los presentes. Miré a ambas delegaciones. Los guerreros Hardy estaban sentados llorando. Este fue un punto de inflexión en las

negociaciones, lo más cerca que habíamos estado hasta entonces de un punto de no retorno. Quedó claro que las partes no negociaban en nombre de sí mismas, sino en nombre de las víctimas, tanto de los nueve millones de víctimas que el conflicto había afectado hasta el momento, como de las víctimas futuras. La responsabilidad de poner fin a la guerra recaía sobre Márquez y De la Calle. Las historias de las víctimas también me recordaron la gravedad de liderar el esfuerzo noruego para ayudar a que este proceso de paz llegara a un acuerdo. Durante la pausa del almuerzo, Leyner Palacios se sentó con Iván Márquez de las Farc, y Óscar Naranjo, ex jefe de la policía colombiana y miembro de la delegación gubernamental. Escuchó a ambos hablar de la guerra, de cómo sus fuerzas se habían enfrentado y de cómo ahora resolverían el conflicto y dejarían de matarse. Fue una comida decisiva para Palacios; empezó a creer que las partes realmente querían hacer la paz en Colombia. Decidió aceptar las reiteradas peticiones de las Farc para hablar con él. Los guerrilleros tenían una pregunta para él: Los jefes de las Farc querían pedir perdón a los habitantes de Bojayá por la masacre de 2002. ¿Cómo respondería la comunidad?

Palacios llevó la petición desde La Habana hasta Bellavista, donde fue de casa en casa preguntando qué pensaban de aceptar una disculpa de las Farc. La guerra seguía haciendo estragos, y las Farc habían llevado a cabo un ataque cerca de Bojayá apenas unas semanas antes. Aún así, nueve de cada diez dijeron estar dispuestos a escuchar a la guerrilla. Pero con ciertas condiciones: Las Farc tenían que dejar de cobrar impuestos a los residentes, retirar las minas terrestres y detener el reclutamiento forzado. En septiembre, Palacios viajó de nuevo a La Habana para entregar la respuesta del pueblo de Boyajá. Las Farc aceptaron inmediatamente las condiciones. Cuando Palacios regresó de La Habana por segunda vez, los habitantes se dieron cuenta de que algo estaba ocurriendo: Se estaban limpiando las minas y se había ordenado a los comandantes locales de las Farc que pusieran fin a los impuestos y a los reclutamientos forzosos. La esperanza se encendió en la comunidad desgarrada por la violencia, y en los meses siguientes Palacios asumió el papel de comisionado para la reconciliación, en Bojayá y el resto de la provincia del Chocó, y ante las Farc en La Habana. Se convirtió en uno de los principales defensores del proceso de paz.

Partidarios de la paz

Antes de que los grupos de víctimas viajaran a La Habana en otoño de 2014, la ONU, la Iglesia y la Universidad Nacional habían organizado reuniones regionales con las víctimas en varias ciudades colombianas. Antes de partir, las víctimas designadas se reunieron en un hotel de Bogotá para conocerse, y en La Habana se les ofreció la oportunidad de hablar con un psicólogo o un sacerdote. Las víctimas debían estar protegidas de los medios de comunicación, y las audiencias en las que contaron sus historias fueron a puerta cerrada. Sin embargo, cada grupo acordó una declaración que se compartió con los periodistas después de la audiencia. En algunos casos, los grupos de víctimas siguieron reuniéndose en Bogotá después del viaje a La Habana.

Era casi demasiado bueno para ser verdad: Las víctimas se reunían por encima de las divisiones políticas, se escuchaban unas a otras, compartían experiencias horribles e incluían el sufrimiento del otro en la historia del trauma nacional de Colombia. Ximena Ochoa era uno de esos casos, procedente de una familia tradicionalmente ganadera de la región del Huila, donde las Farc habían impuesto durante muchos años impuestos y secuestrado a quienes se negaban a pagar. La madre de Ochoa había sido rehén de las Farc, y durante uno de los encuentros regionales de víctimas abogó por que sólo los afectados por los crímenes de la guerrilla viajaran a La Habana. Antes de partir, sin embargo, Ochoa conoció a Camilo Umaña Hernández, un joven abogado que tenía 12 años cuando su padre fue asesinado por agentes paramilitares por orden de agentes estatales. Ochoa tenía

algunas dificultades para caminar, así que Umaña la apoyó, sin saber que ella creía que él no reunía los requisitos para ser víctima. Pero después de conocer a Umaña, cambió de opinión y reconoció que había víctimas de abusos del Estado y que ellas también necesitaban ser escuchadas.

Umaña y Ochoa formaron parte del tercer grupo de víctimas, que se reunieron con las partes en La Habana el 2 de octubre de 2014. Viajaron con un ex policía que había estado secuestrado por las Farc durante doce años hasta que fue liberado en una operación militar en 2010. La delegación de las Farc desaprobó enérgicamente su presencia. Los líderes guerrilleros creían que los soldados y policías no podían ser considerados víctimas: eran prisioneros de guerra, igual que los propios soldados de las Farc que habían sido capturados por el enemigo en el campo de batalla. Según las Farc, él también había recibido un buen trato. Sin embargo, su familia no tenía ni idea de si estaba vivo o dónde se encontraba durante gran parte de su cautiverio.

Las doce víctimas estaban nerviosas por reunirse con las partes en La Habana. Pero como preparación, acordaron comenzar la ceremonia cantando una canción tradicional. Una de las mujeres era de la costa del Pacífico y les enseñó una canción que los afrocolombianos solían cantar cuando alguien había muerto. Las doce víctimas se reunieron con las partes en la mesa de negociaciones cantando: les calmaba los nervios.

Umaña se había preparado a conciencia y había repartido una copia de su testimonio a todos los presentes en la sala antes de hablar. Su padre, Eduardo Umaña, había sido uno de los activistas de derechos humanos más destacados de Colombia en la década de 1990. Como abogado, defendió a presos políticos, dirigentes sindicales y personas que buscaban a familiares desaparecidos. Conocía muy bien la forma en que los militares cooperaban con los paramilitares, y sabía que ese conocimiento ponía en peligro su vida. Sin embargo, se negó a tener guardaespaldas: no quería protección de las fuerzas de seguridad del Estado, que estaban detrás de los abusos contra los clientes a los que defendía. Un sábado en abril de 1998, tres hombres entraron en su despacho, dispararon y mataron al abogado. Tras algunas investigaciones, el Fiscal General informó al padre del asesinado, un conocido profesor de sociología, de que detrás de todo estaba un organismo estatal, por lo que no se podía procesar a nadie. Varios años después, un jefe paramilitar declaró que sus hombres habían llevado a cabo el asesinato por orden de la inteligencia militar. No se ha encontrado castigado a ningún culpable.

Mientras contaba esta historia, Umaña se dio cuenta de que el general Mora, de la delegación gubernamental, le miraba escéptico por encima de sus gafas. Cuando llegó al punto en el que acusaba al Estado colombiano de ser responsable de la muerte de su padre, Mora tiró las gafas sobre la mesa y miró a otra parte.

Las historias de las 60 víctimas provocaron fuertes reacciones a ambos lados de la mesa en La Habana. A veces, los detalles horripilantes asqueaban tanto a la gente que tenían que abandonar la sala. Una mujer contó cómo los paramilitares decapitaron a sus hermanas y utilizaron sus cabezas como balones de fútbol. Ella misma había sido violada por los asesinos estando embarazada. Otra persona puso su pierna ortopédica sobre la mesa mientras contaba lo peligroso que era moverse por paisajes minados. Un exgobernador describió cómo fue secuestrado por las Farc mientras realizaba una misión para la ONU y siendo liberado ocho años después. No buscaba venganza, subrayó el ex gobernador, de nombre Alan Jara. Tampoco le preocupaba que los responsables fueran a la cárcel. Sólo quería asegurarse de que nadie volviera a vivir lo que él vivió.

Jara y Umaña eran importantes partidarios del proceso de paz, al igual que la mayoría de las víctimas. Pero algunas eran escépticas, y una de ellas le dijo a Umaña que se sentía utilizada, que la visita de las víctimas era una legitimación de un proceso de paz polémico. "Por supuesto que nos están

utilizando. Pero nos han utilizado tantas veces para hacer la guerra. Entonces está bien ser instrumentos de paz", respondió Umaña.

La asistencia de las víctimas dejó una profunda impresión en ambas delegaciones en La Habana, especialmente en las Farc. Raskolnikov, el protagonista de la novela Crimen y castigo, de Fiódor Dostoievski, justificó su asesinato de un prestamista alegando que había actuado en beneficio de sus semejantes. Del mismo modo, las Farc habían defendido sus crímenes señalando que eran males necesarios en el camino hacia una sociedad justa. Poco a poco se fue comprendiendo que habían infligido un gran sufrimiento a otras personas, y las reuniones con los afectados aceleraron el proceso. Iván Márquez pidió perdón a una de las víctimas por el asesinato de su madre y sus dos hermanos a manos de las Farc. "La disculpa salió del corazón", dijo Constanza Turbay en una entrevista unas semanas después.

Cuatro de las cinco delegaciones de las víctimas habían estado en La Habana cuando el general Alzate y sus dos socios fueron capturados por las Farc en el departamento del Chocó. El incidente abrió una enorme brecha en el barniz de reconciliación que se había desarrollado en torno al proceso de paz, y sus enemigos pudieron regodearse en que era una locura confiar en cualquier cosa que dijeran las Farc. La desaparición del general también frenó el proceso que Leyner Palacios y las Farc estaban llevando a cabo en el Chocó para formalizar las disculpas de la guerrilla a las víctimas de Bojayá.

Afortunadamente, la extracción del general y su rápida dimisión volvieron a encarrilar el proceso de paz, y la última delegación de víctimas se reunió con las partes en La Habana el 16 de diciembre. Al día siguiente, las Farc declararon un alto el fuego unilateral sin fijar fecha de finalización. El largo otoño con las visitas de las víctimas terminó en un hotel de La Habana, donde los líderes de las Farc se reunieron con varios sobrevivientes de la masacre de Bojayá. Iván Márquez, Pablo Catatumbo y Pastor Alape ofrecieron la primera disculpa oficial por lo ocurrido en Bellavista el 2 de mayo de 2002 y prometieron ir a Bojayá a pedir perdón a toda la comunidad. La ceremonia fue dirigida por sacerdotes colombianos, y las víctimas desplegaron un gran mantel blanco con las fotos de las 79 personas asesinadas sobre el suelo de la sala de reuniones. Encendieron velas, cantaron y varios hablaron en silencio de su sufrimiento. El momento culminante de la ceremonia llegó cuando los comandantes de las FARC y varias de las víctimas se estrecharon la mano alrededor de las fotografías de los muertos. Se escucharon fuertes sollozos tanto de los victimarios como de las víctimas, y ninguno de los presentes pudo contener las lágrimas.

Las Farc intentaron celebrar una ceremonia similar con las respectivas familias de los tres estadounidenses asesinados por la guerrilla en febrero de 1999, pero resultó difícil organizarla. Las autoridades de Washington me dijeron que las disculpas de las Farc tendrían que incluir a los estadounidenses que habían estado secuestrados durante varios años, cosa que la guerrilla no estaba dispuesta a hacer. Los familiares tampoco estaban dispuestos a viajar a La Habana. Así pues, los planes para una ceremonia de reconciliación entre las Farc y los estadounidenses se vinieron abajo.

Comisiones de la verdad

En el otoño de 2014, el proceso de paz estuvo marcado por las visitas de las delegaciones de las cinco víctimas, pero las negociaciones sobre cómo Colombia deberían tratar los crímenes denunciados por las víctimas tardaron en iniciarse. Una opción era crear una comisión de la verdad, y varios expertos acudieron a La Habana para informar a las partes sobre cómo funcionaba un mecanismo de este tipo. Una comisión de la verdad no es un órgano judicial que investigue o procese a individuos. Su propósito es identificar los crímenes cometidos en un conflicto, durante una dictadura o durante

periodos de la historia de un país, con el fin de establecer el relato más creíble y verificable de lo que realmente ocurrió. Argentina y Chile fueron pioneros en la creación de comisiones de la verdad en la década de 1980 para sacar a la luz los abusos cometidos durante las dictaduras militares. Desde entonces, varios países han utilizado modelos similares, como Nepal, Indonesia, Kenia e Irlanda. Noruega creó su primera comisión de la verdad y la reconciliación en 2018: investiga las injusticias cometidas contra las minorías étnicas sami, kven y finlandeses noruegos.

La comisión de verdad y reconciliación más famosa se creó en Sudáfrica en 1995, tras la caída del régimen del apartheid. Estuvo presidida por el Premio Nobel de la Paz y arzobispo Desmond Tutu y funcionó durante siete años. La Comisión recibió testimonios de 21.000 víctimas de abusos cometidos tanto por el Estado del apartheid como por los movimientos de liberación. Tenía el mandato de conceder la amnistía a los autores que admitieran lo que habían hecho, y la Comisión recibió más de 7.000 solicitudes. Se concedió la amnistía a 850 personas y varios centenares de casos se trasladaron al sistema judicial. Sin embargo, se han celebrado pocos juicios.

En la mesa de negociaciones de La Habana, las partes acordaron desde el principio crear una Comisión de la Verdad. Su propósito era establecer "una verdad pura, tan sólida como la Gran Muralla China", en palabras de Iván Márquez. Las Farc querían que la comisión se creara mientras continuaban las negociaciones. Pero el Gobierno se opuso, argumentando que una comisión de la verdad debía formar parte de un acuerdo marco sobre justicia transicional. No podía crearse independientemente del resto. Las partes se comprometieron a pedir a un grupo de académicos que redactaran un informe preliminar sobre la historia de la violencia en Colombia.

La línea roja de Noruega

Las conversaciones de paz de La Habana fueron el proceso de Colombia en el que el papel de Noruega consistió en empujar, animar, escuchar y ayudar a allanar el camino hacia un acuerdo. Podía hacer aportaciones y ser interlocutor, pero no cuestionar los acuerdos alcanzados por las partes. Pero había una excepción. Al principio del proceso de paz, dejé claro a las partes que había una línea roja: Como país facilitador y garante, Noruega no podía firmar un acuerdo de paz que implicara la impunidad de los crímenes de guerra y contra la humanidad más graves. Noruega fue uno de los países más activos en las negociaciones del Estatuto de Roma de 1998, que constituye la base de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya. Desde la creación de la CPI en 2002, Noruega ha sido uno de los principales defensores de la Corte. 123 países se han adherido al Estatuto de Roma, que obliga a todos los países a castigar lo que se conoce como crímenes internacionales, es decir, genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Si un país no castiga a los responsables, éstos pueden ser juzgados por la CPI.

Las Farc y el gobierno acordaron que era necesario algún tipo de acuerdo legal tras la guerra. Pero encontrar la forma de organizar ese sistema judicial fue el hueso más duro de roer de las negociaciones de paz. ¿Debían realizarse las investigaciones, los procesamientos y los juicios dentro del sistema judicial existente en Colombia? ¿Debía crearse un tribunal especial? ¿Deberían ser jueces colombianos o extranjeros, o ambos? ¿Cómo debería organizarse la investigación? ¿Quién debe ser castigado: sólo los que participaron directamente en los crímenes o toda la cadena de mando? ¿Y la responsabilidad penal de políticos y militares? Si el castigo no debía ser el encarcelamiento, ¿cuál podría ser? En el grupo de Nueva York, estos debates se habían mantenido desde su creación en 2013. El grupo se reunía con regularidad y ganaba nuevos miembros, entre ellos el abogado y comunista español Enrique Santiago. Éste había participado en los trabajos preparatorios que condujeron a la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres y a su extradición a

España en 1999. También se había hecho un nombre como experto en derecho internacional y defensor en varios casos destacados de conflictos internacionales. Varios dirigentes de las FARC conocían a Santiago desde la década de 1990, cuando prestó asistencia jurídica a sus familiares exiliados en España. Entre ellos estaban la hija de Timochenko y su madre, así como una de las hermanas de Pablo Catatumbo. Conocí al abogado español en 2013 y lo invité a unirse al grupo de Nueva York junto a un abogado colombiano, Carlos Alberto Ruiz. Ambos se convirtieron en asesores jurídicos de las Farc, con honorarios de consultoría pagados por Noruega.

Las Farc también querían ayuda para reclutar a un tercer asesor, Álvaro Leyva. Leyva tenía un notable nivel de confianza con la guerrilla dado que había sido un destacado político conservador y había pertenecido a la élite del poder de Colombia durante muchos años. Conoció a los líderes de las FARC ya en 1983, cuando era senador y participó en el primer proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla. Ese proceso fracasó, pero Leyva mantuvo conexiones con los líderes de las Farc y había sido particularmente cercano a Alfonso Cano. Participó en todos los intentos de negociación y diálogo con las Farc y el ELN en los años noventa. Leyva era un viejo conocido de Juan Manuel Santos, pero cuando se estableció el contacto secreto entre el presidente y las Farc en el otoño de 2010, fue sin su participación directa. Aun así, conocía el diálogo: Cano se lo había contado, con instrucciones de no revelar lo que estaba pasando.

La primera vez que vi a Leyva fue en Bogotá en 2007. Acababa de regresar a Colombia tras ocho años de exilio. Había sido acusado de lavado de dinero a través de la venta de obras de arte. Las autoridades colombianas habían emitido una orden de detención de Interpol y Leyva había obtenido asilo político en Costa Rica. No obstante, viajó a España, donde fue detenido en 2002 y se arriesgó a ser extraditado a su país de origen. Allí, al igual que los familiares de los líderes de las Farc, recibió asistencia jurídica de Enrique Santiago. En 2006 fue absuelto por el Tribunal Supremo de Colombia, Leyva regresó a su país y se presentó como candidato a la presidencia de Colombia ese mismo año.

Cuando lo conocí, Leyva me dijo que, llegado el momento, Noruega podría desempeñar un papel importante en las negociaciones tanto con el ELN como con las Farc. En cuanto se hicieron públicas las negociaciones de paz con las Farc en 2012, reanudamos el contacto y nos reunimos en Bogotá y La Habana. Leyva era elocuente y a menudo presentaba análisis políticos y jurídicos originales. Los del Gobierno querían mantenerlo lo más lejos posible de la mesa de negociaciones de La Habana. Pero tenía el oído de las Farc, y eso hablaba a favor de atraerlo. Inicialmente, Noruega optó por pagar los vuelos de Leyva de Bogotá a La Habana, donde se reunió con la delegación de las Farc. En 2015, tanto él como Enrique Santiago jugarían papeles aún más importantes en las negociaciones de paz.

La naturaleza de la reconciliación

En el otoño de 2014, hicimos muchos viajes en helicóptero dentro y fuera de la selva. No solo para recuperar secuestrados liberados, sino para transportar a delegados de las Farc a La Habana, y para devolver a otros que ya habían estado allí. La tarea de los líderes guerrilleros que regresaban era difundir el mensaje del proceso de paz entre las filas y lograr que se entendieran los compromisos que sus líderes revolucionarios tenían que asumir en las negociaciones.

El comandante guerrillero Edilson Romaña fue llevado a La Habana en octubre. Había estado operando en el departamento del Meta donde se hizo famoso por lo que la dirección fariana denominó las pescas milagrosas, una serie de secuestros llevados a cabo durante la temporada turística y las vacaciones de Semana Santa entre 1998 y 2002. El método consistía en parar los coches

y secuestrar a la gente en la carretera principal de Villavicencio, la capital del Meta, a unas cuatro horas en coche al sureste de Bogotá. Mediante la extorsión, el robo y la petición de rescates por los secuestrados recaudaban grandes sumas de dinero para las Farc.

Tras llegar a La Habana, Romaña paseaba con Iván Márquez por el pasillo exterior de las oficinas del Palco cuando se toparon con Frank Pearl de la Delegación del Gobierno. "Dr. Pearl, salude a Romaña", le dijo Márquez. "Sé quién es Romaña, por supuesto. Secuestraste a mi suegro", le dijo Pearl al recién llegado. Pearl solía nombrar al abuelo de su mujer como su suegro. "¿Quién es tu suegro?", preguntó Romaña. "La Chiva, el periodista", respondió Pearl, utilizando el apodo del famoso editor, una palabra del argot periodístico para referirse a una noticia extraordinaria. "No fui yo quien lo secuestró, yo no estaba en San Juanito", replicó Romaña. "¿Cómo sabes que lo liberaron en San Juanito si tú no estabas allí?", replicó Pearl, que ahora estaba furioso, pero añadió: "Yo sé lo que hiciste y tú sabes lo que hiciste, pero eso ya no importa. Estamos aquí para que cosas así no vuelvan a ocurrir".

Romaña guardó silencio unos segundos antes de decir: "¿Cómo está tu familia?". Pearl dijo que estaban bien, y Romaña respondió pidiéndole que les enviara recuerdos. Unos días después, Pearl transmitió a su mujer el saludo del comandante guerrillero. "¿Quién se cree que es?", tronó ella. "Creo que fue lo único que pudo decir para disculparse", dijo Pearl. De vuelta en La Habana, entregó entonces un saludo a Romaña de parte de su esposa. El general Mora, miembro de la delegación gubernamental, también había tenido tratos anteriores con Romaña. Había dirigido una fuerza especial que combatía a las Farc en el departamento del Meta antes de convertirse en comandante del Ejército en 1998 y luego en jefe de Defensa. Fue el responsable de la operación de agosto de 2000, durante la cual fue liberado el abuelo de la esposa de Pearl. 14 años después, Mora y Romaña, los comandantes de cada bando, se sentaron en la misma mesa de negociaciones.

El plan de encarcelamiento del Gobierno

Después de las desgarradoras reuniones con las víctimas, y después de que las Farc declararan un cese al fuego unilateral indefinido en diciembre de 2014, parecían estar dadas las condiciones para seguir avanzando en las negociaciones. Pero la delegación del Gobierno comenzó el 2015 provocando a las Farc. Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo viajaron de Bogotá a La Habana sin una ronda de negociaciones programada y sin informar a los países garantes, y se reunieron con los negociadores de la guerrilla. Los dos presentaron un plan de justicia para la posguerra, que incluía que la cúpula de las Farc seleccionara a algunos comandantes para que fueran a la cárcel. La idea era que alguien cumpliera condena en nombre de toda la guerrilla.

Las Farc reaccionaron con rabia y rechazo total. Para ellos estaba fuera de discusión firmar un acuerdo de paz que enviara a su gente a la cárcel. Timochenko había llegado a La Habana; no estaba en la mesa de negociaciones, pero como líder de las Farc desempeñaba un papel clave en la configuración de la estrategia y las posiciones de la guerrilla. Tras el anuncio del gobierno, la delegación de las Farc sostuvo largas reuniones internas en la casa de piedra para discutir qué hacer a continuación. Durante una de ellas, el 3 de febrero de 2015, Timochenko pareció quedarse dormido -nunca solía hacerlo- y los demás se dieron cuenta de que algo iba mal cuando de repente cayó al suelo. En el hospital, a diez minutos de distancia, los médicos cubanos determinaron que el líder de las Farc había sufrido un infarto masivo. Si no hubiera recibido tratamiento médico tan rápidamente, habría muerto. Permaneció en el hospital durante un mes, lo que retrasó aún más el avance de las negociaciones. El resto de la delegación de las Farc no quiso comprometerse sin la bendición del líder.

El gobierno estaba impaciente y las Farc frustradas. Una mañana llamé a la puerta de Pablo Catatumbo y entré en su dormitorio, donde unas ligeras cortinas ondeaban con la cálida brisa caribeña que entraba por la ventana abierta. El veterano de las Farc estaba sentado en el borde de la cama, en ropa interior, suspirando pesadamente. Catatumbo temía que todo el proceso estuviera a punto de descarrilarse. El gobierno insistía en que los comandantes guerrilleros debían cumplir sus condenas en prisión, dijo. La presión era excesiva, y Catatumbo dudaba que tuviera sentido continuar. "Tengan paciencia. Mantenga la calma hasta que encuentre una solución", le respondí. Catatumbo era una figura importante en la delegación de las Farc, un contrapeso más transigente a Santrich y Márquez. Pero las desavenencias internas, el infarto de Timochenko y las presiones del Gobierno tuvieron un alto precio para el amante de la literatura en las filas de las Farc. Aun así, se puso la ropa y se preparó para nuevos tiros y aflojes en la mesa de diálogo, tanto ese día como en los siguientes.

Un peso pesado de la diplomacia llegó a La Habana en febrero de 2015 para reunirse con las partes del proceso de paz y ayudar a impulsarlo. Kofi Annan había sido Secretario General de la ONU durante ocho años y recibió el Premio Nobel de la Paz en 2001. Al frente del organismo mundial, se había labrado una considerable autoridad moral, entre otras cosas criticando a la superpotencia Estados Unidos por invadir a Irak en 2003. Esto le había generado enemigos, sobre todo entre los republicanos estadounidenses, pero gozaba del respeto de gran parte del mundo. En los años siguientes a su jubilación como secretario general, en 2006, medió en conflictos en Kenia, Siria y Myanmar, y las partes en el proceso de paz de Colombia tenían grandes esperanzas puestas en una reunión con el experimentado diplomático ghanés.

Pero su contribución fue decepcionante. Los delegados de las FARC se mostraron escépticos cuando supieron que Annan pasaría varios días en Colombia antes de llegar a La Habana. Temían que estuviera muy influenciado por posiciones gubernamentales. Después de la reunión entre Annan y las Farc en el famoso Hotel Nacional de La Habana, hablé con un iracundo Santrich en el vestíbulo del hotel. "Annan nos presionó mucho, mostrando falta de objetividad y poca comprensión de que también se habían cometido abusos por parte del Gobierno", dijo. Cuando Annan se sentó entonces con ambas partes, Márquez insistió en que estaba descartado que alguien de las Farc pasara un solo día en la cárcel.

Los jefes guerrilleros se mostraron especialmente descontentos con la rueda de prensa de Annan en La Habana, en la que los periodistas se interesaron sobre todo por conocer la opinión del ex jefe de la ONU sobre las penas de cárcel para las Farc. Annan trató de ser equilibrado, diciendo que ese era un asunto que debía dejarse en manos de la justicia y que, si Colombia no cumplía con sus responsabilidades, intervendría la Corte Penal Internacional. Antes de la rueda de prensa, Humberto de la Calle e Iván Márquez habían acordado sentarse en el estrado con Annan entre ellos, pero dejar que fuera él quien respondiera a las preguntas. Márquez se sintió muy incómodo allí sentado sin oportunidad de responder.

Al día siguiente desayuné con Annan en la habitación de su hotel. Quizás pensó que las reuniones no habían tenido éxito, y me preguntó cómo habían percibido la visita los delegados de las Farc. Le respondí con toda la sinceridad que pude, a pesar de estar sentado frente al ex Secretario General de la ONU, mi modelo diplomático: "Estaban bastante contentos con las reuniones y muy descontentos con la rueda de prensa", dije, sabiendo lo disgustados que estaban en el bando de las Farc. Annan lo atribuyó a las preguntas de los periodistas y se preguntó por qué los cubanos no habían libretado mejor la rueda de prensa. La visita no contribuyó a avanzar en la mesa de negociaciones y Annan no fue invitado de nuevo a La Habana.

En el estancamiento de las negociaciones, las Farc anunciaron en febrero de 2015 que la edad mínima de los guerrilleros pasaría de 15 a 17 años. Este fue un pequeño paso en la dirección correcta. Desde el inicio del proceso de paz, el Gobierno había exigido a las Farc poner fin al reclutamiento de niños y enviar a los menores de edad a la escuela en lugar de utilizarlos para la guerrilla. Pero las Farc habían negado que hubiera niños en sus filas, y si alguno de sus miembros era menor de edad, había optado por unirse a ellas voluntariamente, según la cúpula guerrillera.

En marzo de 2015, el presidente Santos respondió al alto el fuego unilateral de las Farc ordenando al ejército que suspendiera todos los ataques aéreos por un mes. Esto significó que, por primera vez durante el proceso de paz, las partes habían cesado el fuego simultáneamente. Habían transcurrido más de tres años desde el inicio de las negociaciones secretas en La Habana y casi un año desde la firma del último acuerdo parcial. Las rondas de negociaciones comenzaban, terminaban y no se daba ningún paso decisivo para resolver el espinoso asunto de la justicia y el castigo por los crímenes de guerra. Las partes se dieron cuenta de que, si las negociaciones seguían como hasta ahora, punto por punto, Santos acabaría como presidente antes de que estuviera listo un acuerdo de paz. Por ello, crearon una subcomisión para el fin del conflicto, el quinto de los seis puntos de la agenda del Acuerdo Marco de 2012. Esto significó que las partes trabajaron en paralelo en dos temas difíciles: cómo poner fin a la guerra y cómo castigar todos los crímenes cometidos.

Nuevos atentados

Al amanecer del 15 de abril de 2015, diez soldados del gobierno fueron asesinados por guerrilleros de las Farc en las afueras de la pequeña ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Cauca, suroeste de Colombia. Dieciocho resultaron heridos. Los informes iniciales sugirieron que los soldados estaban durmiendo en el edificio de una escuela, por lo que el ataque fue una clara violación del cese al fuego de las Farc que llevaba cuatro meses de duración. Pero más tarde el ejército informó que la tropa estaba patrullando cuando fue tiroteada y atacada con explosivos. Sin embargo, las Farc afirmaron que los guerrilleros habían actuado en defensa propia. "El Gobierno está tratando de provocarnos ataques", afirmó Iván Márquez cuando hablé con él. La dirección de las Farc en La Habana no supo del ataque hasta que se produjo, y fue un recordatorio de los riesgos de cualquier proceso de paz: Los líderes que negocian un acuerdo de paz nunca tienen control absoluto de los soldados en el terreno.

Santos levantó inmediatamente la prohibición de los ataques aéreos que había impuesto un mes antes, mientras que el general Mora respondió dimitiendo como miembro de la delegación negociadora en La Habana. De nuevo, como antes, Santos se negó a concedérsela. Probablemente necesitaba a Mora más que nunca; el ataque a los soldados en el Cauca renovó las críticas al proceso de paz, sobre todo por parte de los militares y de la derecha, liderada por Álvaro Uribe. La firma de Mora en un acuerdo de paz podría frenar la oleada de oposición, si al menos se llegara a un acuerdo. En mayo, el gobierno llevó a cabo varios bombardeos mortales contra las Farc. En uno de ellos murieron 26 guerrilleros en el departamento del Cauca, dos de los cuales eran conocidos de la delegación fariana en las conversaciones de La Habana. Habían regresado al Cauca en diciembre de 2014 para realizar pedagogía de paz entre sus propias filas. Idun había acompañado a uno de ellos, Emiro Jiménez, de vuelta a Colombia en avión y helicóptero. Había comprado una almohada naranja en La Habana, que pretendía llevar a su familia en Bogotá. Jiménez comentó la almohada de Idun y dijo que era bonita. "Puedes quedártela, probablemente la necesites más que yo", respondió Idun. El joven comandante estaba encantado con el regalo de la diplomática noruega. Cinco meses después, fue asesinado.

Los bombardeos del ejército gubernamental llevaron a las Farc a levantar el cese al fuego unilateral que la guerrilla había impuesto en diciembre. A finales de mayo, el ambiente en la mesa de negociaciones volvía a ser más bien sombrío, mientras llegaban a La Habana varias personas nuevas para reunirse con las delegaciones. Entre ellos estaban los miembros del grupo de Nueva York, que se reunieron por separado con las delegaciones y aportaron su contribución a las negociaciones sobre el sistema de justicia de posguerra. Las reuniones no salieron bien. A Morten Bergsmo, del Grupo de Nueva York, le sorprendieron algunas de las ideas del asesor de las Farc Álvaro Leyva. No se alineaban con el derecho penal internacional, dijo Bergsmo a Farc, y tenía toda la razón. Los representantes de la guerrilla, que dos años antes habían llegado a confiar en Bergsmo, respondieron con profundo escepticismo, preguntándose si el grupo de Nueva York era una herramienta del presidente Santos. La delegación gubernamental, por su parte, no concedió demasiada importancia a las conversaciones con los expertos internacionales en justicia penal.

Pasé de las reuniones del Grupo de Nueva York a la Comisión de Igualdad de Género, que el 25 de mayo tuvo una reunión con Zainab Bangura, Representante Especial de la ONU para la Violencia Sexual en los Conflictos. Temprano a la mañana siguiente, fui en bicicleta a casa de Iván Márquez y le dije que estaba preocupada por el estado del proceso de paz. Márquez se mostró sorprendido y aparentemente despreocupado. "La gente no entiende la relación entre lo que ocurre sobre el terreno y lo que ocurre aquí en La Habana", le señalé. Con los medios de comunicación colombianos informando a diario sobre los combates, a la población le resultaba cada vez más difícil creer que se estaban llevando a cabo verdaderas negociaciones de paz.

Para ayudar a las partes a salir de la crisis creada por el recrudecimiento de las hostilidades, Cuba y Noruega pusieron en marcha un itinerario para avanzar rápidamente en la mesa. El primer paso fue una declaración pública de los países garantes el 27 de mayo, en la que advertimos que la ola de violencia estaba poniendo en peligro el proceso de paz. Instamos a las partes a proseguir las conversaciones sobre las cuestiones pendientes, incluido el establecimiento de un cese al fuego mutuo y definitivo. La actual ronda de negociaciones se prorrogó y, a continuación, de acuerdo con el plan, las partes dieron a conocer información para reforzar la confianza pública en los avances del proceso de paz. Anunciaron que habían acordado crear una comisión de la verdad en cuanto se alcanzara un acuerdo de paz y presentaron un proyecto piloto de desminado.

Además, anunciaron que la ONU y UNASUR serían invitadas a la mesa para asesorar sobre un acuerdo de cese al fuego.

Los colombianos no eran los únicos que se preguntaban por el estado de las negociaciones. "La comunidad internacional se pregunta por qué no hay avances", dijo la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, cuando asistió a su primera sesión plenaria el 29 de mayo. Holguín era una política y diplomática experimentada, y ahora Santos le había pedido que se uniera a la delegación negociadora mientras desempeñaba sus funciones como ministra. Era una fuerza motriz y la persona adecuada para aportar una nueva dinámica al proceso. Pero su llegada creó algunas fricciones dentro del equipo de gobierno, ya que la posición ministerial de Holguín rompía el equilibrio de poder, y porque tenía un estilo más informal que Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo. Santos se había enterado de que la interacción social entre los negociadores de las Farc y sus propios emisarios en La Habana era mínima, lo cual quería rectificar. Invite a uno de los comandantes a un restaurante, le ordenó el presidente a la canciller Holguín.

La primera noche invitó a Pastor Alape, de las Farc, a cenar con ella y Óscar Naranjo, ex director de la Policía. Cuando Holguín recogió la cuenta, Alape bromeó diciendo que pagaría la próxima vez en Harry's Bar, un popular restaurante de Bogotá. Holguín concluyó después de la cena que los líderes

de las Farc habían terminado mentalmente con la guerra y ya estaban haciendo planes para la vida en tiempos de paz. En su opinión, se podría haber ahorrado mucho tiempo si la delegación gubernamental hubiera llegado a conocer mejor a sus interlocutores en la mesa de negociaciones.

La Ayuda Popular Noruega fue la encargada de dirigir el proyecto de desminado acordado por las partes en junio de 2015. El proyecto piloto se iba a llevar a cabo en dos localidades, una en el departamento de Antioquia y la otra en Meta. La organización noruega tenía una larga trayectoria y una buena reputación en materia de desminado, especialmente en África, y yo estaba ansioso por que recibiera el encargo. Debería haberme informado mejor sobre si era la elección correcta. APN tuvo un encuentro brutal con la realidad colombiana. El proyecto implicaba trabajar en estrecha colaboración con el ejército y las Farc para identificar y retirar minas antipersona, y para los desminadores noruegos no fue fácil relacionarse y dirigir a actores profesionales de estas instituciones bien establecidas. También era nuevo para ellos retirar minas mientras el conflicto seguía su curso, paralelo al proceso de paz. Esto exigía un alto nivel de imparcialidad y equilibrio, y era difícil evitar los errores, tanto físicos como políticos. No obstante, el proyecto piloto contribuyó a fomentar la confianza entre las partes, que fueron capaces de resolver tareas juntas sobre el terreno. Esta fue una buena lección para más adelante, cuando los antiguos enemigos tuvieron que poner en práctica el cese al fuego definitivo, el desarme y la desmovilización de los guerrilleros de las Farc.

Comisión de Juristas

En junio de 2015, el presidente Santos viajó al Foro de Oslo, donde elogió a Noruega por su contribución para que las negociaciones de paz con las Farc llegaran más lejos que nunca, y donde anunció que intensificaría las negociaciones de paz en La Habana. Lo hizo llegando a un acuerdo con las Farc para crear una segunda subcomisión que se ocuparía del tema de la justicia de posguerra. La nueva comisión estaría integrada por seis juristas, de los cuales las Farc y Santos designarían tres cada uno. Se reuniría en La Habana, pero no haría parte de las delegaciones negociadoras establecidas.

Esta fue una nueva bofetada para Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, quienes primero tuvieron que aceptar que a la canciller se le diera un papel preponderante en la mesa de negociaciones y ahora quedara completamente al margen. Llevaban tres años negociando con las Farc y el tire y afloje por la justicia transicional se prolongaba desde hacía un año. Jaramillo y de la Calle conocían los temas al dedillo, y ahora personas completamente nuevas debían negociar la parte más complicada del acuerdo de paz. Al crear esta subcomisión, Santos socavó la autoridad de sus propios enviados a La Habana, de lo que tomó nota la delegación de Farc.

La comisión de juristas se convertiría en un importante escenario para los dos asesores de la guerrilla, el viejo conocedor de las Farc Álvaro Leyva y el comunista español Enrique Santiago, quienes, junto con un abogado colombiano de derechos humanos, Diego Martínez, fueron designados representantes de la guerrilla. Santos había nombrado a dos antiguos dirigentes de la Corte Constitucional de Colombia, Juan Carlos Henao y Manuel José Cepeda, así como a un profesor estadounidense, Douglass Cassel. Estos seis se reunieron por primera vez el 27 de julio en casa 23, la casa noruega de Laguito. Los representantes del Gobierno eran nuevos, mientras que los tres que representaban a las Farc estaban familiarizados con la dinámica de La Habana y los muchos entresijos del proceso de paz. Observé los primeros intercambios tentativos e informales a través de la mesa en casa 23 y descubrí que los delegados de las Farc tenían una ventaja significativa. Los abogados del gobierno eran hábiles, y Henao y Cepeda, en particular, tenían una experiencia muy relevante, pero los abogados de las Farc les llevaban mucha ventaja.

Santiago desempeñó un papel crucial en la comisión de juristas. Era excepcionalmente hábil y se benefició del hecho de haber discutido varias ideas en el grupo de Nueva York, que luego probó con las Farc. En la primera reunión en casa 23 también apareció un invitado inesperado, Jesús Santrich. No podía ocultar una sonrisa, y cierto triunfo en sus ojos detrás de sus gafas de sol oscuras, por el hecho de que las Farc habían logrado superar a De la Calle y Jaramillo.

A mediados de 2015 era imposible salir de vacaciones. Hacía tiempo que había renunciado a llevar la cuenta de cuántas semanas de vacaciones y días libres me correspondían. Podía sentir que mi paciencia se agotaba a medida que el proceso de paz con las Farc se alargaba y, simultáneamente, el ELN y el Gobierno no lograban llegar a un acuerdo marco. Pero tenía mis divertimentos únicos, como cuando unas guerrilleras uniformadas y maquilladas de colores me invitaron a bailar salsa y merengue en un campamento de las Farc en lo profundo de la selva en una noche tropical de julio. Yo había ido allí directamente desde las negociaciones del ELN en Ecuador para participar en la extracción de un soldado que las Farc habían capturado unos días antes. Elisabeth, que ahora tenía otras funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores, había vuelto a Colombia para una breve misión, y fuimos juntos a Puerto Asís, en el extremo sur del país, y de allí al campamento de las Farc donde nos recibió una guardia de honor de varios centenares de guerrilleros al mando de Joaquín Gómez, el hombre que 18 años antes había recibido al embajador Utheim. Me regalaron un par de botas clásicas de las Farc y estreché muchas manos antes de que Gómez dirigiera una asamblea en la que informó a los guerrilleros rasos sobre la justicia transicional.

Tras la cena y el posterior baile, dormí en una sencilla cama de troncos de madera bajo la lona de una tienda. Era el tipo de cama en el que Alf Onshuus había dormido durante los meses que estuvo secuestrado por la guerrilla en 2008. Junto al refugio improvisado había un pozo de un metro de profundidad al que me dijeron que me tirara si atacaban el campamento. Aunque ahora había un cese al fuego y estaba desmilitarizada la zona en la que estábamos, según el protocolo de la toma de rehenes, las Farc mantenían sus procedimientos de emergencia. Me quedé dormido al son de los guerrilleros que custodiaban el campamento, comunicándose entre sí imitando animales. Casi imperceptiblemente, los mensajes en clave se mezclaban con el resto de la cacofonía de la selva.

Primera cumbre

La Comisión de Juristas se reunió periódicamente después de su primera reunión en casa 23 a finales de julio, para terminar con dos días de intenso trabajo en casa del representante del gobierno Henao en Bogotá, donde Santos hizo una visita a los seis juristas. El 19 de septiembre estaba lista la propuesta de la Comisión para el sistema judicial colombiano de posguerra, marco que permitió a las partes acordar la primera cumbre del proceso de paz entre el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las Farc, Timochenko. Desde que se alcanzó el acuerdo parcial sobre drogas ilícitas 16 meses antes, no se habían producido avances visibles en las negociaciones, al menos no visibles para la mayoría de los colombianos, y la cumbre pretendía remediarlo. El Papa Francisco visitó Cuba del 19 al 22 de septiembre, y el presidente Santos esperaba que el jefe de la Iglesia católica pudiera glosar con su presencia el anuncio del casi acuerdo de los colombianos. Pero el Vaticano se negó, alegando que era demasiado arriesgado bendecir un acuerdo inacabado mientras la guerra civil seguía su curso.

La cumbre se fijó para el miércoles 23 de septiembre de 2015, y Timochenko pensó que en la reunión él y Santos discutirían una posible fecha, un plazo final, para firmar un acuerdo de paz. No sabía que Santos había puesto como condición previa para acudir a La Habana que las partes hubieran acordado de antemano la fecha definitiva. Santos había propuesto, a través de su delegación, dar

seis meses al resto de las negociaciones, pero los representantes de las Farc en el Laguito se habían negado a aceptar un plazo. Humberto de la Calle llamó a Santos a última hora de la noche del martes 22 de septiembre con la respuesta, tras lo cual Santos canceló su viaje a La Habana. Unos minutos más tarde, sin embargo, de la Calle volvió a llamar. Márquez había dado la vuelta cuando se enteraron de que Santos no vendría, y ahora la delegación de las Farc acordó terminar las negociaciones antes del 23 de marzo de 2016.

Timochenko llegó a La Habana en la madrugada del miércoles. Había padecido dengue y aún no estaba totalmente recuperado, pero se presentó a la reunión con Santos en La Habana. El líder cubano, Raúl Castro, dio la bienvenida a los dos antes de dejar a los enemigos de toda la vida a su aire. El ambiente estaba tenso y a punto de estallar cuando Timochenko preguntó qué quería decir Santos con lo de la fecha límite.

La fecha ya está fijada, respondió Santos. "No, íbamos a discutir si debíamos tener una fecha de finalización y no estoy de acuerdo", dijo Timochenko, para molestia del presidente. "Vine porque la fecha está fijada, no vine a decir tonterías", dijo Santos. Los dos convocaron a los negociadores para escuchar lo que habían acordado la noche anterior. Márquez y De la Calle llegaron y confirmaron que habían llegado a un acuerdo, que la delegación de las Farc no le había comunicado a Timochenko. Al jefe guerrillero no le gustó lo que escuchó y le dijo al presidente que culparían a las Farc si no se cumplía el plazo, lo que quería evitar. "Eso no sucederá. Ahora estamos en el mismo barco y no podemos dejar que se hunda", replicó Santos.

La irritación mutua claramente había quedado a un lado cuando Santos y Timochenko, con el líder cubano Raúl Castro entre ellos, se reunieron después con la prensa. Los tres iban vestidos con camisetas blancas y el ambiente era expectante. Santos y Timochenko, un poco tímidos por naturaleza, parecían emocionados y ligeramente nerviosos, animados por el momento histórico. Rodolfo Benítez y yo leímos la declaración conjunta de las partes, en la que se afirmaba que habían acordado establecer una comisión de la verdad y un tribunal especial para investigar y condenar a los responsables de los crímenes de guerra más graves. Las partes también habían acordado establecer un sistema de compensación para las víctimas y se habían comprometido a ultimar un acuerdo de paz definitivo en un plazo de seis meses. Todo proceso de paz tiene una imagen icónica, a menudo la de un apretón de manos, símbolo de progreso y esperanza. La imagen más famosa del proceso de Colombia se tomó este miércoles cuando terminó la ceremonia, la gente aplaudió y Santos se levantó y tendió la mano a Castro. Timochenko también le tendió la mano, y Castro los cogió a ambos y los juntó, colocando sus manos sobre las de ellos mientras miraba sonriente a la cámara. Fue un momento dorado para Colombia, e igualmente dorado para Raúl Castro.

Entre bastidores, sin embargo, se desarrollaba un gran drama. El documento presentado por la comisión de juristas no era la descripción definitiva de un acuerdo sobre justicia transicional. Humberto de la Calle, quien firmó el documento en nombre de Santos justo antes de la ceremonia, escribió "documento en proceso" junto a su nombre. Las Farc insistieron en que la comisión de juristas había recibido plenos poderes, mientras que la parte gubernamental sostuvo que las principales delegaciones tenían la última palabra. Aún no habíamos terminado, aunque la ceremonia dio la impresión de que el tema de la justicia transicional ya estaba zanjado.

A Bojayá

Tras la histórica cumbre, la realidad volvió a golpear a las delegaciones negociadoras. Quedaban muchos detalles por concretar antes de que estuviera listo un acuerdo parcial sobre las víctimas.

Ambas partes cuestionaban lo que Timochenko y Santos habían anunciado realmente, y las declaraciones de los medios de comunicación echaban más leña al fuego. "Todo va en distintas direcciones", escribí en mi cuaderno tras una de las muchas reuniones en casa 23, donde las delegaciones solían sentarse a negociar a pequeña escala. Además del punto del orden del día sobre las víctimas, estábamos metidos de lleno en la discusión del siguiente punto, el fin de la guerra. Llamamos a un asesor de medios de comunicación colombiano y reunimos a las partes para almorzar en la residencia noruega, con el fin de ayudarles a mejorar y coordinar su mensaje al público en un momento en el que había tanto en juego. El éxito fue moderado. De las dos partes, el Gobierno en particular consideró que tenía poco que aprender sobre la gestión de los medios de comunicación.

El 15 de diciembre de 2015 se cerró finalmente el acuerdo parcial sobre las víctimas. Contenía una descripción detallada de la Jurisdicción Especial para la Paz, que era un marco completo para la justicia posterior a la guerra civil. En cuanto al castigo, el acuerdo establecía que no se concederían amnistías ni indultos para los delitos más graves. Las personas declaradas culpables de tales delitos y que no admitieran su responsabilidad serían condenadas a penas de prisión ordinarias de entre 15 y 20 años. Quienes dijieran la verdad y admitieran su responsabilidad podrían ser condenados a entre cinco y ocho años de "restricción efectiva de libertad y derechos". Esto significaba que los culpables podían eludir la prisión y que correspondería al Tribunal Especial decidir qué sanciones imponer en su lugar.

El acuerdo sobre las víctimas fue histórico, pero aún quedaban muchos obstáculos por superar. En Colombia, varias de las víctimas que habían viajado a La Habana recibieron amenazas de muerte. Fabrizio Hochschild, de la ONU, denunció varias de estas amenazas, y los portavoces de las víctimas anunciaron a principios de 2015 que habían recibido más de cuatrocientas amenazas de muerte en cinco meses. Cuanto más nos acercábamos a un acuerdo de paz definitivo, más se movilizaban las fuerzas opositoras. Yo tenía mis dudas: ¿Podría Colombia realmente conseguir crear un tribunal especial, podría encontrarse la verdad por encima de toda la violencia? ¿Las víctimas recibirían justicia y reparación? ¿Y cómo reaccionarían Uribe y sus partidarios ante el hecho de que fuera posible evitar las penas de prisión, incluso para los delitos más graves?

Estas dudas me acompañaron cuando viajé a Bojayá en diciembre de 2015. Había pasado un año desde la ceremonia de reconciliación en un hotel de La Habana entre Farc y algunas de las víctimas de la masacre de 2002. Ahora, los comandantes guerrilleros cumplían su promesa de llevar a cabo una ceremonia en la comunidad que había sido afectada tan gravemente por sus disparos. Mientras sobrevolábamos el departamento del Chocó, vi valles verdes y afilados, como esculpidos por su creador con una espada. Ríos relucientes fluían por el exuberante paisaje. Este debe de ser el lugar más hermoso del mundo, pensé, pero tan marcado por la brutalidad. La gente que vivía aquí carecía de servicios de salud, escuelas adecuadas y seguridad en su vida cotidiana. ¿El proceso de paz de La Habana podría cambiar eso?

Cuando llegamos a Bellavista, se habían colocado sillas delante de la iglesia, ahora restaurada, donde iba a tener lugar la ceremonia. Pastor Alape de las Farc, y Sergio Jaramillo, del Gobierno, entraron juntos en la iglesia y permanecieron dentro unos minutos a solas. Un grupo indígena ofreció una oración antes de que actores locales reconstruyeran el ataque de 2002 en una conmovedora obra de teatro. Los supervivientes contaron sus experiencias. Con lágrimas en los ojos, Alape pidió perdón en nombre de las Farc y aseguró que la guerrilla ahora quería la paz y que las víctimas serían indemnizadas. Para el Gobierno, aún no había llegado el momento de pedir perdón en nombre del Estado. Eso vendría más adelante, indicó Jaramillo en su discurso en Bojayá.